

Paradigma contrainsurgente en el siglo XXI y representaciones de los peligros en el escenario regional: el caso del EPP y sus efectos en Paraguay.

Winer, Sonia.

Cita:

Winer, Sonia (2017). *Paradigma contrainsurgente en el siglo XXI y representaciones de los peligros en el escenario regional: el caso del EPP y sus efectos en Paraguay. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-019/752>

Mesa 133: Guerra, historia, sociedad e intelectuales. Abordajes desde la historia y las ciencias humanas

Título de la ponencia: Paradigma contrainsurgente en el siglo XXI y representaciones de los peligros en el escenario regional: el caso del EPP y sus efectos en Paraguay.

Autora: Sonia Winer

Pertenencia institucional: UBA-FSOC/CONICET

Ponencia (PARA PUBLICAR EN LAS ACTAS)

La siguiente ponencia se propone, a partir del estudio de caso -en torno de las representaciones construidas y publicitadas respecto del Ejército del Pueblo Paraguayo-, analizar los fundamentos político-jurídicos y los lineamientos doctrinarios que subyacen tras el paradigma contrterrorista preventivo selectivo imperial ampliamente difundido por agencias estadounidenses, israelíes y europeas en el siglo XXI en la región.

Como señalan Irala y Pereyra¹ el relato de los grandes medios de prensa en Paraguay tuvo y tiene como referencia permanente a la denominada “guerra de guerrillas” o “guerra irregular”, es decir, asumen que se produjo el alzamiento en armas de un reducido grupo insurgente cuyo objetivo sería tomar el poder y provocar una revolución en el país.

Siguiendo esta lógica, su accionar debería estar focalizado en conseguir la adhesión de la población e incluso de las fuerzas regulares del estamento policial y militar, construyendo a partir de las reivindicaciones de las clases subalternas un programa y una estrategia para fortalecer la correlación de fuerzas en favor de los oprimidos y denunciar a los poderes que reproducen la dominación en el lugar.

Sin embargo, las acciones violentas que se le han atribuido al EPP han ido en un sentido contrario, desacreditando los reclamos del movimiento campesino, habilitando despliegues represivos y una profundización de los discursos estigmatizantes sobre las organizaciones populares y la dirigencia progresista en un sentido funcional a la expansión del modelo extractivista que desmonta bienes naturales y desplaza forzosamente a los habitantes rurales.

¹ Irala A. y Pereira Cardozo H.J. (2016). “Violencia armada y avance de la soja en el norte del Paraguay”. *Revista Conflicto Social n°16* (180 y 181), pp.180-208. Buenos Aires.

Es decir, sirvió para justificar la construcción de un escenario bélico y virajes político-normativos inscriptos en un paradigma contrainsurgente imperial, que convirtieron a las víctimas de un sistema extremadamente inequitativo en delincuentes y naturalizaron su persecución a partir de un sistemático bombardeo “informativo” consumado por los que sectores empresarios manejaron y actualmente condicionan la producción y la circulación de noticias y del entretenimiento en Paraguay, reconociendo cuatro grupos centrales en sintonía con el esquema trazado por Ortiz².

El más reciente, encabezado por el actual presidente Horacio Cartes, quien en abril del 2015 adquirió el holding mediático del Grupo Domínguez Dibb y poco meses después compró los medios del Grupo Wasmosy (El Popular, Hoy.com y Radio UNO), Unicanal -a través del empresario Javier Bernardes- y el diario ADN, logrando acumular recursos indispensables para defender y acrecentar su poder económico y la imagen de su gestión, aunque este hecho le valió el malestar del grupo Vieri y del grupo Zuccolillo, quienes criticaron desde sus difusoras el proyecto reeleccionista del presidente y convocaron a la ciudadanía a manifestarse en contra de los intentos de enmienda constitucional. El conflicto al interior de la clase dominante atravesó la coyuntura, se difundió en las noticias internacionales a partir de las imágenes de la quema del edificio parlamentario del 31 de marzo de 2017 y de una posterior represión que culminó con la ejecución de Rodrigo Quintana, en la misma sede del partido opositor y delimitó el escenario electoral para 2018 en favor de los dirigentes tradicionales apoyados por los periodos *ABC Color* y *Última Hora* (dejando fuera de la carrera, después de una intervención que involucró desde el papa Francisco hasta a altos funcionarios de Estados Unidos, no sólo a Cartes sino también a Lugo).

A pesar de las “disputas intra-oligárquicas” recientes y de las especificidades que señalamos a continuación, todos coincidieron en articular una moderna red de empresas de diversos rubros, con alta tecnología, con cuantiosos recursos y eficaces políticas de mercado, contundentes al momento de proteger los intereses de cada uno de ellos.

² Ortiz A. (2016). “Paraguay ¿cuáles son los grupos que controlan la agenda informativa del país?” en *E’a*. Disponible en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/04/13/paraguay-cuales-son-los-grupos-que-controlan-la-agenda-informativa-del-pais/> [consultado en marzo de 2017].

Segovia por su parte, destacó que el grupo que mayor vinculación tuvo con el agronegocio en Paraguay fue el Vierci³ pues sus empresas se consolidaron a partir de 1967, cuando la dictadura stronista (1954-1989) y desde entonces se dedicaron principalmente a la distribución de productos importados, sobre todo en el sector alimentario. Vierci creció vertiginosamente y amplió sus actividades a mercados como la electrónica, los juegos de azar, los medios de comunicación, los inmuebles, la producción agropecuaria, la agroindustrialización y la distribución de víveres, operando en casi todos los campos de la economía, aunque priorizando las de comunicación y aquellas vinculadas a la cadena alimentaria, dos sectores estratégicos cuyo control le confirió un enorme poder en general sobre las gestiones gubernamentales, en tanto su capacidad de incidir en la fijación de precios sobre productos básicos de manera cuasi monopólica.

No obstante, la explicación para comprender por qué las representaciones de los peligros que difundió desde sus medios de comunicación apelaron a la estigmatización de los movimientos campesinos, se halla en que la empresa Francisco Vierci y CIA S.R.L. (aunque no directamente del grupo, pero vinculada a la familia) se dedicó a la exportación de productos agrícolas como el trigo, el maíz y las semillas de soja.

Perfiles que se difundieron y amplificación a través del diario *Última Hora*, los canales televisivos 4 Telefuturo⁴ y La Tele, las radios La Estación y Urbana, entre otros, utilizándolos para cimentar imágenes afines a escenarios bélicos (aunque también para defender los intereses que se derivaron de otros negocios del grupo).

La relevancia de analizar algunos contenidos del periódico *Última Hora*, a pesar de su tirada baja (quince mil ejemplares diarios), se debió a que logró instituirse como referente de una prensa escrita mejor trabajada en cuanto a la construcción de un matiz de imparcialidad. Finalidad conseguida por medio de un mayor equilibrio entre los espacios destinados a mensajes de distintos sectores para erigirse en el público con un perfil presentado como neutral.

³ Segovia D. (2010). *Comunicación y Democracia. El rol de los medios en la construcción del discurso político ciudadano*. Asunción: Aradurá Editorial.

⁴ Telefuturo ha logrado en pocos años convertirse en uno de los canales con mayor audiencia de Paraguay.

Para observar dicho fenómeno se tomó como muestra un tema planteado incluso un año antes de la aparición en escena del EPP: el tratamiento sobre un proyecto de ley que buscaba la regulación del uso de agrotóxicos por parte de latifundistas en Paraguay. *Última Hora* fue uno de los medios que más espacio ofreció en ese momento a campesinos y campesinas para denunciar las violaciones de derechos humanos básicos que sufrían cotidianamente ligadas con las fumigaciones de sojales. Aun así, cuando el 6 de setiembre de 2007, en la Cámara de Diputados se trató el citado proyecto que pretendía regular en cierta medida su utilización, la campaña que realizó el diario fue totalmente favorable a los intereses de los grandes terratenientes. Algunos titulares como los siguientes “Ley de plaguicidas hará perder USD 750 millones a agricultura”, “Agricultores se manifiestan contra la ley antiagroquímicos”⁵, etc. Dieron cuenta de la tendenciosidad, junto con el ínfimo o nulo, espacio que se otorgó respecto a los beneficios que la norma hubiera traído a la sociedad campesina y al medio ambiente en general.

Por otra parte, el grupo Zuccolillo se agrandó notablemente del mismo modo durante la dictadura, cuando se inauguró el diario *ABC Color* con el apoyo de Stroessner. Sus dinanismos se relacionaron con la venta de inmuebles (propiedades en Asunción, edificios, shopping centers, además de tierras en casi todos los Departamentos del país), la importación, la construcción, las finanzas, el comercio y las telecomunicaciones. Entre las empresas de Aldo Zuccolillo, se destacó Inmobiliaria del Este (con 24 agencias, la más grande inmobiliaria del Paraguay⁶); Financiera Atlas; Constructora Atlas; Nueva Americana (centro comercial); Shopping Mariscal López (uno de los dos shopping mall más grandes de Asunción); acciones en Núcleo Personal; acciones en Tapé Ruvichá; Tabacalera Pety; Editorial Gráfica Mercurio.

Aldo Zuccolillo se hizo célebre como propietario de *ABC Color*, el periódico más influyente del Paraguay, debido a su capacidad para instalar en el debate público la agenda de temas y

⁵ Navegar ediciones Última Hora (2007/8) en <http://www.ultimahora.com> [consultado en febrero de 2017].

⁶ Cabe mencionar que Inmobiliaria del Este sería probablemente la empresa más grande del sector en el país con tierras en casi todos los Departamentos. A pesar de que la mayor parte de sus tierras serían periurbanas, la familia Zuccolillo también tendría grandes extensiones rurales y, en este sentido, la expulsión campesina y el poblamiento desordenado de las ciudades que se produce como resultado del violento avance del agronegocio en el campo paraguayo, vendrían a beneficiar su negocio inmobiliario.

de promover candidatos político-partidarios y/o destituir autoridades, generando además operaciones de desestabilización sobre administraciones contrarias a sus intereses.

A pesar de que el alcance de su tirada tampoco sería grande, los demás medios, sobre todo radiales y televisivos, levantaron y levantan las noticias de *ABC Color* y por ende su incidencia sobre la subjetividad siempre se vio amplificada en la cotidianeidad.

Para citar apenas alguno de los vínculos del grupo con el agronegocio⁷, se puede comenzar mencionando que Aldo Zuccolillo está casado con Graciela Pappalardo, -hija del fundador de Tapé Ruvichá, don José Pappalardo-, quien tiene acciones en Tapé Ruvichá S.A.E.C.A., la mayor importadora y representante maquinaria agrícola *New Holland* y *Ford*, y sus implementos en el país. Por otra parte, Miguel Ángel Zaldívar, yerno de Aldo Zuccolillo (casado con su hija Natalia) fue presidente de Financiera Atlas (perteneciente a la familia Zuccolillo), dedicada a financiar créditos dirigidos al sector agrícola para productores de soja (principalmente) y cultivos de entre safras (trigo, maíz, canola, girasol).

Una ligazón particular también asoció al emporio Zuccolillo con la trasnacional CARGILL y con diversas iniciativas tomadas con esta corporación, defendidas desde las páginas de *ABC*. Por ejemplo, la construcción de un megapuerto granelero en las inmediaciones de Asunción, el cual amenazaba con contaminar con sus desechos tóxicos toda el agua que se distribuía en el área metropolitana (puesto que se proyectaría a menos de quinientos metros de las principales tomas pertenecientes a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)).

Conexiones que se tradujeron en la forma de exhibir a los protagonistas del llamado “conflicto agrario”, manipulando imágenes y contenidos para desprestigiar a los habitantes rurales que resistirían el avance del agronegocio, trazando las condiciones para la imposición de la militarización en el país y la estigmatización de la lucha en un contexto de particular

⁷ Otra relación en este sentido se produce con la Secta Moon, que invirtió en la compra de más de 700 mil hectáreas de tierra en el Chaco paraguayo. Esta compra, totalmente irregular fue insistentemente justificada por el diario, al mismo tiempo que aprovechó para difamar una y otra vez a los pobladores de la zona que luchaban por su derecho básico a vivir como dueños en la tierra que les había pertenecido por más de una centuria.

“oportunidad” para los intereses oligárquico-empresariales ligados al modelo capitalista extractivo-excluyente y a los partidos políticos tradicionales.

En la investigación publicada por Sánchez⁸ sobre una muestra de editoriales divulgadas por los matutinos *ABC Color* entre el 20 de abril de 2008 y el 15 de agosto de 2009, cuando se cumplía el primer año de la asunción presidencial de Lugo, se observó cómo ya se estaban generando las circunstancias para profundizar la criminalización de la protesta campesina en el país.

La casi generalidad de los títulos de esa época se refirieron con una connotación negativa respecto de los campesinos⁹, a quienes se asociaba a la pobreza (y por ende, se los considera fácilmente “manipulables” por “líderes” o “populistas” que los perjudicarían), a la ignorancia, a la haraganería y a la poca productividad. Mientras que a las “organizaciones campesinas” se las relacionaba directa o indirectamente con la intimidación, caracterizando a ésta como violencia “campesina” (lo que creó una representación particularmente discriminatoria), jamás haciendo mención a la violencia “sojera” o “ganadera”, línea que después se fue fortaleciendo al ligar la figura del lugareño con operativos adjudicados al EPP y con la representación “terrorista” sobre el conflicto.

Así, se tendió a exhibir al trabajador o pequeño propietario rural como un sujeto problemático y amenazante debido a su falta de “conocimientos” y otras adjetivaciones imbricadas con ciertas nociones de *paraguayidad* con la intención de adjudicarle a la presunta insurgencia una cuota de especificidad local.

Dicho mecanismo discursivo postuló a cualquier tipo de construcción organizacional popular rural como agente responsable del problema¹⁰ y por ende construyó una tipificación que ubicaba a cualquier colectivo (fuera su accionar de corte revolucionario o fuera de carácter antipopular) en el plano de la ilegitimidad, justo en un momento de correlación de fuerzas favorables a sus demandas y de pequeñas victorias logradas por la vía institucional.

⁸ Sánchez J.T. (2009). “El campesino es pobre porque es ignorante. El discurso legítimo de los medios escritos de comunicación y la lucha por la tierra” en M. Palau (Coord.) *Criminalización a la lucha campesina* (pp. 103-131). Asunción: QR Producciones.

⁹ que centra además los textos en relación con una dinámica histórica y social más general cuya temporalidad no se limita al lapso seleccionado.

¹⁰ Sánchez J.T. *Op. Cit.* (p. 117, 119 y 122).

A modo de ejemplo, una editorial del 7 de octubre de 2008 levantaba una advertencia contra la propuesta gubernamental de realizar la reforma agraria pues podría “fomentar la violencia de las organizaciones campesinas”, al tiempo que sostenía que “los protagonistas, es decir, propietarios, empresarios, trabajadores rurales y los ‘organizados’, teniendo a las autoridades solamente como árbitros del enfrentamiento” -aquí se presentaba como ‘organizados’ solamente a los campesinos, palabra puesta entre comillas y asociada de manera directa con la agresión-, en tanto continuaba “una guerra rural entre organizaciones campesinas y los demás habitantes del campo jamás resultaría en la victoria de uno de los dos bandos, sino en la derrota del país”¹¹

El texto mostró cómo, ya puesto al alcance nacional, el sujeto identificado en la conflictividad rural era la “organización” que se enfrentaría a “los demás habitantes del campo”¹².

Otros editoriales posteriores reforzaron dicha asociación: “Lugo debe acabar con la violencia rural o ella acabará con su gobierno”¹³, profecía cumplida según los relatos editorializados cuando su destitución. “La violencia campesina está arruinando el país”¹⁴ y “El movimiento de los ‘sin tierras’ en Paraguay es político”¹⁵, resultó uno de los muchos ejemplos que podríamos enumerar.

Estas operaciones discursivas tendieron a: 1) negar a las organizaciones campesinas como interlocutoras democráticas de tipo gremial, con capacidad para representarse a sí mismas y para reivindicar derechos consagrados en el marco legal; 2) cuestionar la vinculación de partidos políticos o de la administración pública con las mismas -por “paternalismo”, “manipulación” o “engaño”-; 3) despojar de legitimidad a la reivindicación de la reforma

¹¹ ABC Color (2008). “¿Le preocupa al presidente Lugo la violencia rural?”. Asunción, 07/10 en www.abc.com.py [consultado en julio de 2009].

¹² Winer S. (2015). *Doctrina de inseguridad Mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región*. Buenos Aires: Prometeo editorial.

¹³ ABC Color (2008). “Lugo debe acabar con la violencia rural o ella acabará con su gobierno” Asunción, 23/10 en www.abc.com.py [consultado en julio de 2009].

¹⁴ ABC Color (2008). “La violencia campesina está arruinando el país”. Asunción, 03/11 en www.abc.com.py [consultado en mayo de 2009].

¹⁵ ABC Color (2008). “El movimiento de movimiento de los ‘sin tierra’ en Paraguay es político”. Asunción, 21/11 en www.abc.com.py [consultado en mayo de 2009].

agraria y 4) considerar como única vía legítima para que el campesinado mejorara sus condiciones de vida la iniciativa o práctica de carácter individual¹⁶.

Este tipo de configuraciones simbólicas se retroalimentaron con otras de tipo “psicológico-culturales”¹⁷ que les dificultaron la concepción del trabajador del agro como sujeto de derecho, habilitadas por un adoctrinamiento que lo ubicó como un adversario deshumanizado en un presunto escenario bélico.

Riesgo que, hasta la aparición pública del EPP, no parecía calar tan hondo en la subjetividad de la población paraguaya a pesar de que la sede diplomática de Estados Unidos en Asunción, al igual que los grupos mediáticos, venían insistiendo con la supuesta presencia de las FARC entre el campesinado del país desde el año 2004.

Ya dimos cuenta en otras investigaciones¹⁸ de cómo los aprendizajes adquiridos durante el régimen stronista perduraron en los poderes dominantes, habiendo sido enseñados no sólo a fuerzas represivas estatales y para estatales, sino también a la dirigencia colorada y partidario-tradicional de la ANR-partido Colorado y del PLRA –partido liberal.

Representaciones que a su vez se inscribieron y resignificaron sobre un trasfondo político-normativo penal que, en sintonía con los poderes de facto, aún hoy va siendo trasmutado y se asocia cada vez más al Derecho Penal del Enemigo (DPE) con prácticas y argumentaciones funcionales a la persecución de lo colectivo-organizacional popular.

Nuevamente se acreditó desde ese momento que el campesino paraguayo socialmente expresaba un *lugar fronterizo* en el cual, en tanto sujeto domesticado, era reivindicado como una esencialidad cercana a la tierra y a la naturaleza, pero en tanto sujeto movilizad, resultaba estigmatizado, criminalizado y cosificado¹⁹, no siendo considerado relevante para las operaciones de instalación mediática si los niveles de organización devenían en violencia revolucionaria o resultaban más coherentes con el accionar sicario y parapolicial.

¹⁶ Sánchez J.T. *Op. Cit.* (p. 128).

¹⁷ Winer S. *Op. Cit.* (p. 235).

¹⁸ *Ibid.* (p. 124 a 144).

¹⁹ Halpern G. (2012) “ABC de un golpe” en R. Carbone y L. Soler (eds.) *Franquismo en Paraguay. El golpe*. Buenos Aires: el 8vo. Loco ediciones (pp.111-121).

En ese marco, se produjo el primer “golpe oficial” adjudicado al EPP, que consistió en un simple acto de sabotaje, es decir la quema de una maquinaria agrícola en la estancia Santa Herminia -propiedad de un empresario brasilero-, a mediados de marzo de 2008 (un mes antes de que Lugo ganara con la consigna de reforma agraria en su programa electoral).

Producto de esta acción se acusó de ser miembros del EPP a un grupo familias campesinas del pueblo de Kuruzú de Hierro, Departamento de Concepción, que acababan de obtener una victoria legal para exigir que el dueño de la estancia referida colocara la obligatoria “barrera viva”²⁰ que los protegiera de la toxicidad generada por la fumigación con agroquímicos (causantes de una serie de afecciones a la salud de los pobladores desde el año 2006) sobre el campo lindero a su vecindad.

En este sentido, Pereira²¹ publica un recorrido detallado de las iniciativas estatales -como la de Fiscalía del Medioambiente, la gobernación de Concepción o el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)- en la defensa de los derechos de los pobladores a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la salud, desarrollando los intentos fallidos del patrón sojero Nabor Both -previos al episodio (que este autor considera como un autoatentado) de la quema- para imputar a sus vecinos, los denunciante en cuestión, de delitos como por ejemplo “robo de ganado”: dichas iniciativas habrían sido desestimadas por falta de pruebas y por lo absurdo de sus alegatos -puesto que en el campo citado en las actas, como señala el expediente judicial “nunca existieron animales”²²- hasta que apareció en escena el EPP.

De allí en más, todo devino en procesamiento de los dirigentes que habían obtenido el fallo judicial favorable a la comunidad, imputándoseles delitos sindicados con la guerrilla que jamás se llegaron a probar. Cabe preguntarse ¿por qué habrían de optar por la lucha armada movimientos que en ese preciso momento lograban que sus reclamos fueron oídos a través de las vías legales?

²⁰ Una fila de árboles de dos metro de alto por cinco metros de ancho para proteger las casas de los habitantes de las fumigaciones desparramadas en los sojales.

²¹ Pereira H. (2016). *Extractivismo armado en Concepción. EPP el “fantasma” de la guerrilla que “lucha” por la expansión del capital internacional en suelo norteño*. Asunción: Litocolor.

²² *Ibid.* (p. 113 y 144).

Lo contraproducente del EPP para los intereses de las organizaciones populares nos invita a revisar operaciones análogas en otros países vecinos, montadas en tiempos “oportunos” y claves para habilitar escenarios, imágenes e iniciativas perjudiciales para la resistencia de los oprimidos frente a un patrón de acumulación similar²³.

Acciones como la segunda adjudicada al EPP se provocaron en otro momento crucial: el 31 de diciembre de 2008, ya con Lugo en el sillón presidencial, y refirieron a un supuesto asalto a un cuartel policial escasamente vigilado en Tacuati que, presión de los latifundios comunicacionales mediante, devinieron en la imposición sobre la administración aliancista de un enorme operativo policial-militar denominado *Jerovia*: el primero de siete -incluyendo en dos ocasiones la declaración del estado de excepción-.

Proceso interesante de analizar, en tanto se consumó operacionalizando contenidos editoriales que construyeron una progresiva “narcotización discursiva”²⁴ como fundamento de la intervención militarizada territorial.

A modo de ejemplo, cabe señalar que el 21 de enero se publicó el titular “Documentos del EPP en centro de acopio de marihuana”²⁵, para pocos días después continuar desplazando la semántica de la guerra contra la guerrilla hacia la lucha antinarcóticos: “Informes del servicio de inteligencia determinaron la existencia de un centro de acopio de marihuana, *relacionada* con simpatizantes del EPP”²⁶.

Ya a la sazón inferimos que el corrimiento discursivo de la ideología política hacia el tema de la marihuana se habría ocasionado por el poco impacto inicial producido por la representación de la amenaza del EPP en el público lector.

²³Como señala Pereira en su libro, la protección armada del latifundio, el ataque a la población rural y su criminalización, en especial a las organizaciones campesinas, forma parte de un esquema de operaciones similar al que fuera implementado en Brasil en los años ochenta por paramilitares vinculados a los terratenientes de la Unión Democrática Rural (UDR) para evitar que los reclamos del Movimiento Sin Tierra (MST) de incorporar la reforma agraria fueran incorporados en la Constitución Nacional.

²⁴ Winer S. (2010). “La institucionalización de la violencia en las tendencias hemisféricas securitarias en Paraguay: un análisis de caso” en F. Nievas (compilador) *Arquitectura Política del Miedo*. Buenos Aires: El Aleph (pp.123-137).

²⁵ ABC Color (2009). “Documentos del EPP en centro de acopio de marihuana”. Asunción, 21/01 en www.abc.com.py [consultado en marzo de 2010].

²⁶ ABC Color (2009). “Nuevos hallazgos sobre el EPP” Asunción, 31/01 en www.abc.com.py [consultado en marzo de 2010], *itálica nuestra*.

Entonces, los argumentos periodísticos se modificarían para desvincular al *Jerovia* con la lucha armada (las mismas menciones al EPP desaparecieron con el transcurrir de las semanas) para asociarlo con el tráfico ilegal de estupefacientes.

Cabe mencionar que despachos diplomáticos de la embajada estadounidense en Asunción publicados por *Wikileaks*, aseveraron que entre 2008, 2009 y 2010 Lugo habría manifestado su preocupación ante la sede caracterizando de “muy peligroso” al EPP, manifestando que habría pedido ayuda discretamente a Colombia y a Brasil para encontrar a un empresario que habría sido secuestrado por éste. También revelan que para combatir la presunta insurgencia el titular del ejecutivo desplegó un Destacamento Conjunto de Respuesta Rápida (*Joint Rapid Response Detachment*) de fuerzas especiales paraguayas y asesores militares norteamericanos, aunque luego discontinuaría este y otros “entrenamientos” por pedido de su Ministro de Defensa y de los países vecinos²⁷.

Estos documentos dejaron ver, asimismo el descrédito de los informes de inteligencia enviados a Washington respecto de la existencia real de una milicia “marxista-leninista” y especularon con que sería una creación de sectores partidarios tradicionales y formaría parte de una estrategia o de una “disputa doméstica” para restarle poder al gobierno electo²⁸.

Para ese periodo, el discurso oficial del gobierno giraría en torno a la necesidad de incautar plantaciones que se encontrarían dentro de los asentamientos campesinos y de este modo se fortalecería la asociación del reclamo por la tierra de los desposeídos con el delito común y el tráfico ilícito, táctica inconfundible de los procesos de criminalización.

No es casual que las noticias sobre el tema se publicaran incluso en una nueva sección del matutino principal del grupo Vierci, *Última Hora* titulada “El narcotráfico y los problemas sociales”²⁹.

²⁷ O'Donnell S. (2014). *Politileaks. Todo lo que la política argentina quiso esconder. Sus secretos en wikileaks de la A a la Z*. Buenos Aires: Sudamericana.

²⁸ *Ibid.* (p. 195 y 196).

²⁹ Winer S. *Op. Cit.* (p. 22).

Jamás se mencionó, la existencia y menos aún el grado de eficacia de una base militar de la DEA norteamericana ubicada en la localidad cercana de Pedro Juan Caballero para “combatir” el tráfico de marihuana.

Diferente episodio atribuido al EPP se situó en Agua Dulce y Arroyito en 2010, subrayando presuntos enfrentamientos armados que habrían provocado la muerte de 13 civiles y de 6 policías, aunque también se afirmó su repliegue ante la balacera policial.

Si tomamos en cuenta las características de esta última acción, es decir una banda en un tiroteo con la policía, la misma se asemejaba más a un hecho delictivo que insurgente o militar. Pero la reacción al episodio consistió, una vez más, en la multiplicación de los operativos policial-militares y se incrementaron los recursos sin explicar que el EPP, debido a las dificultades tácticas que presentaba, difícilmente pudiera aspirar siquiera a enfrentarse -mucho menos a “poner en jaque”- a un cuerpo represivo profesional.

Extrañamente, y aunque se insistió en enlazar un grupo con otro, los patrones de conducta del EPP muy poco se asemejaron o se asemejan con los de las FARC, en especial en lo que refiere a capacidad de movilidad en radios amplios sin ceñirse a una territorialidad precisa - hasta lograr un control estable sobre una porción territorial-, puesto que se ubicó dentro de los límites de tres departamentos señalados en el cuadro, conformando un triángulo de no más de 300 kilómetros a la redonda. De hecho, esta característica de “radio reducido” fue uno de los factores que ayudó a alimentar la falaz hipótesis mediática del control geográfico en manos de la guerrilla, la cual postuló un control “indirecto” sobre el espacio que sería ejercido a través de los dirigentes de organizaciones campesinas “adherentes” al EPP, relacionando nuevamente a los sectores movilizados del campesinado con la violencia rural.

Entrevistas realizadas por nosotros en aquel momento en el lugar, recordaron que un par de años antes se habían desarrollado allí ejercicios del Comando Sur de los Estados Unidos, alegando presencia de las FARC, pero también destacando la importancia de la frontera cercana a la amazonia brasileña. Suponemos que el interés norteamericano por los bienes estratégicos se debía a que los Departamentos intervenidos contienen importantes riquezas naturales como, por ejemplo, zonas boscosas en una superficie forestal de más de 233.000 hectáreas en Concepción, recursos hídricos (destaca un “ojo” del Sistema Acuífero Guaraní),

abundancia en materia de minerales tales como cobre, oro, plomo, zinc, plata, bario, molibdeno, wolframio, cuarzo, mica y feldespato y a que la población local resistiría la explotación de estos materiales algunos indispensables para el funcionamiento de la industria estadounidense.

Esto al margen del avance del capital sojero-ganadero ya mencionado, que entró en fuerte conflicto con los trabajadores rurales debido a la contaminación ambiental, la cual, insistimos, desde la aparición del EPP (aunque antes también), fue relegada por cuestiones securitarias imputando a cada poblador que se movilizara o protestara por *complicidad* con grupos de la “izquierda radical”.

Por otra parte, al día de hoy resulta por lo menos incierto el criterio de las acciones del EPP, puesto que no se condijo jamás con las reglas básicas de los grupos revolucionarios sobre el desgaste que debieran ejercer operaciones políticamente (en la relación entre las poblaciones y gobernantes). El resultado de los golpes atribuidos al EPP tuvo como corolario una permanente legitimación mediática y pública de la represión y de la persecución a dirigentes agrarios y devino incluso en medidas antipopulares como el del sabotaje de dos torres de alta tensión que cortaron la energía a más de 765.000 paraguayos.

Estos reinstituyeron la base a través de la cual los grupos empresarios-mediáticos lograron forjar determinados marcos abstractos de interpretación en los mapas cognitivos de la subjetividad colectiva, allanando el camino para ligar a sujetos sociales previamente estigmatizados con hechos violentos mediante el uso de ciertos términos y vocabulario implantado, por ejemplo: campesinos, protesta, movilización, violencia y armas pasaron a constituir un mismo paquete conceptual de manera indiferenciada, creando un enemigo amenazante mucho más “visible” que una banda de veintiséis personas, siendo una de las consecuencias a corto plazo, el temprano y *preventivo* aborto de la propuesta de reforma agraria (que de todas maneras resultaba difícil de viabilizar en ese periodo) por ser considerada una incitación a la “violencia campesina” y a la “lucha de clases”.

La aparición del EPP resultó por tanto habilitante para un incremento de la intervención de agencias estadounidenses y de la reactivación de programas y acuerdos firmados a comienzos de los años sesenta (como el Plan Umbral y la Iniciativa Zona Norte), que vinieron a confluir

con representaciones heredadas de otros tiempos -resignificadas y retroalimentadas por las empresas comunicacionales- en la subjetividad de gran parte de la población, las cuales también se vigorizaron a través de otra operación guionada, la masacre de 11 campesinos y 6 policías en el marco de un desalojo de las tierras de Marina Cue que terminó con la destitución del presidente y con una experiencia breve y debilitada de democratización en el país.

La matanza³⁰ en Paraguay evidenció una escena premeditadamente montada para excusar y concretar sin argumentos contundentes, sin posibilidad de defensa real y sin verdadera institucionalidad democrática, el derrocamiento de Lugo una semana después de ejecutada la misma.

Inmediatamente luego de los hechos y sin investigación judicial de por medio, apareció una versión en los grupos informativos que decía que la masacre de Curuguaty se había desatado debido a una emboscada generada por los dirigentes agrarios, sobre quienes se desencadenó una persecución penal dirigida a ratificar el libreto difundido por televisión, por periódicos y por radios.

En junio de 2012 varios campesinos heridos fueron ejecutados (“rematados” en la jerga de las fuerzas) por miembros de las fuerzas represivas³¹, pero los únicos responsables para la justicia local resultaron los trabajadores rurales remitidos a la cárcel de Tacumbú, luego de haber sufrido torturas físicas y psicológicas, mediante las cuales se los intentó vincular con el EPP.

El líder del movimiento condenado, Rubén Villalba³², destaca como símbolo corporal de este montaje, a partir del cual se concretó un anunciado golpe parlamentario.

Paraguay contaba con frondosos antecedentes de matanzas, conspiraciones golpistas y homicidios políticos que habían jalonado la apertura pos dictatorial durante los postreros

³⁰ Realizada por 400 efectivos policiales, 20 patrulleros, policía montada y presencia de francotiradores particulares -aunque sin intervención de las Fuerzas Armadas-.

³¹ Para conocer lo sucedido en la masacre recomendamos la excelente reconstrucción realizada por Villadet J. (2013) *La masacre de Curuguaty. Golpe sicario en el Paraguay*. Asunción: Arandurá Editorial.

³² Las irregularidades del proceso judicial ha desatado una ola de protestas nacionales y de campañas de solidaridad internacionales con Rubén Villalba. Ver <https://www.youtube.com/watch?v=HZtch5Mpayk> [consultado en diciembre de 2016].

veinticinco años³³, precediendo lo cometido contra Lugo (en 1996 con el gobierno de Wasmosy, en 1999 con Cubas Grau³⁴, en el 2000 con el golpe atribuido a Oviedo³⁵).

El papel protagónico del andamiaje mediático en la construcción del escenario político-social durante los días previos y posteriores a la masacre y al golpe ha sido analizado por otros autores³⁶, pero nos interesa subrayar que una vez más un episodio como el mencionado devino en la asociación directa y premeditada de los movimientos campesinos con la insurgencia armada para excusar la represión y la criminalización de los sectores populares violando sus derechos esenciales.

Las editoriales de ese momento así lo evidenciaron: “Preparan celada a policías en allanamiento, con saldo de 6 uniformados acribillados y 9 ocupantes abatidos en la réplica. [...] Indicios y testigos tienden a confirmar que hubo ‘guerrilleros’ infiltrados, que proporcionaron armamento y entrenamiento”³⁷.

“Sin tierras emboscan a jefes de Geo”³⁸ y “Se habla de infiltrados del EPP”³⁹.

En el informe publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay⁴⁰ se rastreó la construcción del clima de ese momento poniendo el acento en la presunta presencia de guerrilleros extranjeros en el sitio donde se realizaba la ocupación: “La supuesta presencia de venezolanos y colombianos para conducir prácticas militares en los principales asentamientos de ‘sin tierras’ en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú es una presunción de los servicios de inteligencia de la Policía basada en testimonios y algunas

³³ De los ocho presidentes que se sucedieron entre 1989 y 2014, cuatro sufrieron efectos de golpes, conspiraciones y matanzas (Wasmosy, Cubas Grau, González Macchi y Lugo) y otro dato a tener en cuenta es que tanto Julio César “Yoyito” Franco, como vicepresidente, conspiró contra González Macchi al igual que su hermano, Federico Franco, lo haría luego contra Lugo.

³⁴ El marzo paraguayo previo asesinato de Argaña, entonces vicepresidente.

³⁵ Aunque luego se conoció la participación de sectores liberales, empresarios y dueños de medios de comunicación en la organización del mismo.

³⁶ Carbone R. y Soler R. (2012) *Franquismo en Paraguay. El golpe*. Buenos Aires: el 8vo. Loco ediciones.

³⁷ ABC Color (2012) “Preparan celada a policías en allanamiento”. Asunción, 16/06 en www.abc.com.py [consultado en febrero de 2015].

³⁸ *Ibid.* (página 3).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ CODEHUPY (2013) “Informe sobre los derechos humanos en Paraguay”. Colgado en <http://codehupy.org.py> [consultado en agosto de 2014].

evidencias documentales”⁴¹. Titulares que reforzaron las asociaciones entre FARC y EPP, ligándolas a las organizaciones campesinas de base del Paraguay.

Lo cierto es que en ese momento Lugo acababa de nombrar un nuevo Ministro del Interior, Carlos Filizolla, quien a diferencia de su primo y anterior titular en el cargo, Rafael Filizolla, tenía por objeto desvincular la asesoría de Estados Unidos y consensuar un nuevo protocolo de intervención sobre las protestas sociales a fin de reconstruir la desgastada relación entre el titular del ejecutivo y las organizaciones campesinas con miras a la próxima campaña presidencial. Esto fortalecería la capacidad de las mismas para incidir en el proceso electoral de 2013 y por ende, una vez más, también se apeló a la presunta existencia del EPP para acelerar una operación que interrumpiera esa posibilidad.

En el libelo acusatorio contra Lugo se lo inculpó de gobernar “promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos (...) y la violación del derecho de propiedad (...) generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas”, a la vez que se lo responsabilizaba por “estos grupos extremistas, como el denominado EPP o los mal llamados “Carperos”, [que] se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba”⁴².

La primera sede diplomática en salir públicamente a reconocer al vicepresidente golpista Federico Franco fue la de Estados Unidos en Asunción. De allí en más y durante los nueve meses siguientes hasta las elecciones que consagraron a Horacio Cartes (2013-actualidad) y el retorno del coloradismo a la conducción del ejecutivo, las intervenciones de las agencias imperiales en las políticas se incrementaron vertiginosamente publicitándose a través de los medios como una práctica natural: “Paraguay instalará una base militar en la zona del EPP”

⁴¹ ABC Color (2012) “Presencia de las FARC en Paraguay” Asunción, 20/06 en www.abc.com.py [consultado en febrero de 2015].

⁴² libelo acusatorio reproducido Carbone R. y Soler R. (2012) *Franquismo en Paraguay. El golpe*. Buenos Aires: el 8vo. Loco ediciones (paginas 18, 19 y 20).

“Las FARC hundieron a Colombia en la guerra y el EPP quiere los mismo”⁴³ ”Fiscal imputa por terrorismo y otros delitos a seis miembros del EPP”⁴⁴, solo por mencionar algunas.

Se gestaron así las condiciones para la imposición de un mix de neoliberalismo “recargado” y autoritarismo combinado con un giro que consolidó la contrainsurgencia para asegurar la reproducción social bajo relaciones de dominación de clase, operando principalmente bajo estrategias de “asistencia” internacional -en realidad, profundización de la injerencia- y de criminalización de la resistencia campesina, todas ellas constantemente “justificadas” por medio del discurso del enemigo interno y de la premisa de la existencia de una amenaza difusa que se esparciría por todos lados en un escenario bélico pero no se conseguiría hallar.

Las investigaciones realizadas por Latjman⁴⁵ tomaron como punto de inflexión algunos eventos ocurridos durante el primer año del gobierno de Horacio Cartes atribuidos al EPP - el asesinato del ganadero Luis Lindstron en la estancia Paso Itá⁴⁶, muy cercana al asentamiento campesino Tacuati Poti⁴⁷, producido el 31 de mayo de 2013 y la ejecución de 4 guardias de seguridad privada y de 1 policía en la estancia Lagunita el 17 de agosto del mismo año, en San Pedro- para explicar de qué modo se fue cimentando el clima para la (re)institucionalización de la “hipótesis de conflicto” interna en el país durante el inicio de la gestión cartista y para dar cuenta de los lineamientos que se arguyeron para justificar un nuevo giro político-normativo en el sentido recomendado por el Comando Sur:

A continuación del “primer ataque en la era Horacio Cartes”, ocurrido dos días después de su ascunción al Ejecutivo [el 15 de agosto de 2013], una estrategia más ofensiva contra el “grupo criminal y terrorista de izquierda” empieza a aparecer en la prensa. Se presenta como la única solución posible para resolver aquello que el nuevo ministro del Interior, Francisco De Vargas, llama una cuestión de interés nacional (...) Uno de los procesos clave que

⁴³ ABC Color (2014) “Las FARC hundieron a Colombia en la guerra y el EPP quiere los mismo” Asunción, 12/02 en www.abc.com.py [consultado en febrero de 2015].

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Latjman T. (2014) *Nos dicen del EPP para quitarnos las tierras. El discurso del enemigo interno como quiebre de la resistencia campesina en Paraguay*. Tesis para obtener el título de Maestra en Estudios Latinoamericanos. México DF: Universidad Autónoma de México

⁴⁶ Entre julio y septiembre de 2008 el ganadero había sido secuestrado, supuestamente por el mismo grupo, y liberado por una recompensa de 130.000 dólares.

⁴⁷ Donde persiste una experiencia agroecológica implementada por la comunidad que se asume como una “isla en el mar de la sojización”.

identificamos es el de la progresiva consolidación de algunas tendencias discursivas que “desembocan” en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley N° 5036/13 “Que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la ley N° 1337/99 De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, atribuyendo facultades extraordinarias al Ejecutivo para militarizar determinadas zonas del país con el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas⁴⁸. En conclusión, a pesar de que los patrones de conducta atribuidos al EPP difirieron notoriamente de las experiencias sobre guerrilla históricas, la publicitación de los actos atribuidos a éste contribuyó a edificar –por parte de los “latifundios comunicacionales” y los sectores empresarios ligados con los partidos tradicionales–, un clima bélico en Paraguay.

En materia de paradigma contrterrorista, estas publicaciones marcaron la “novedad” doctrinaria en el siglo XXI respecto del anterior, naturalizando matrices discriminatorias y la vulneración de derechos humanos de manera abierta y con mayor profundidad que en épocas anteriores sobre la subjetividad poblacional, al tiempo que habilitó cambios político-normativos en un sentido autoritario y regresivo; como la modificación de la ley de Defensa nacional y de Seguridad interna (Ley N°1337/99, aprobada como Ley N°5036/13); que institucionalizó el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones consideradas por el presidente como de “agresión interna” –antes solo estaba autorizado en casos de declaración del Estado de Excepción– contra un enemigo, como ya mostramos, social y mediáticamente *construido* dentro de las fronteras nacionales cuya figura –a pesar de las evidentes contradicciones que presentaría respecto de la existencia real de un grupo con reivindicaciones progresistas–, se asoció con las luchas de los oprimidos por el modelo extractivista de acumulación.

En esta línea, consideramos importante investigar cómo los ordenamientos discursivos procuraron asociar a las iniciativas organizadas y a las protestas político-sociales que interpelaban el núcleo del sistema impuesto con la violencia, el terrorismo y el peligro, vaciando de sentido (o invirtiendo significados) consignas de los sectores críticos del despojo.

⁴⁸ Latjman T. *Op. Cit.* (página 4).

Asimismo, examinamos cómo el entramado de intereses en el que participaban la oligarquía latifundista coincidió y aun coinciden para contener e inhabilitar las condiciones de construcción/re-construcción de fuerzas y de proyectos alternativos que se planteen transformaciones sustanciales sobre la realidad.

Bibliografía

Carbone R. y Soler R. (2012) *Franquismo en Paraguay. El golpe*. Buenos Aires: el 8vo. Loco ediciones.

Irala A. y Pereira Cardozo H.J. (2016). “Violencia armada y avance de la soja en el norte del Paraguay”. *Revista Conflicto Social n°16* (180 y 181), pp.180-208. Buenos Aires.

Sánchez J.T. (2009). “El campesino es pobre porque es ignorante. El discurso legítimo de los medios escritos de comunicación y la lucha por la tierra” en M. Palau (Coord.) *Criminalización a la lucha campesina* (pp. 103-131). Asunción: QR Producciones.

Segovia D. (2010). *Comunicación y Democracia. El rol de los medios en la construcción del discurso político ciudadano*. Asunción: Aradurá Editorial.

Pereira H. (2016). *Extractivismo armado en Concepción. EPP el “fantasma” de la guerrilla que “lucha” por la expansión del capital internacional en suelo norteco*. Asunción: Editorial Litocolor

Latjman T. (2014) *Nos dicen del EPP para quitarnos las tierras. El discurso del enemigo interno como quiebre de la resistencia campesina en Paraguay*. Tesis para obtener el título de Maestra en Estudios Latinoamericanos. México DF: Universidad Autónoma de México.

Winer S. (2010). “La institucionalización de la violencia en las tendencias hemisféricas securitarias en Paraguay: un análisis de caso” en F. Nievas (compilador) *Arquitectura Política del Miedo*. Buenos Aires: El Aleph (pp.123-137).

Winer S. (2011) *De la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Inseguridad Mundial: políticas de Defensa y Seguridad en Paraguay (2001-2011)*. Tesis para

obtener el título de Doctor en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Winer S. (2015) *Doctrina de inSeguridad Mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región*. Buenos Aires: Prometeo.